

REPUBLICA DE COLOMBIA



TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL VALLE DEL CAUCA

Auto interlocutorio No. _____

Santiago de Cali, junio veintiocho (28) de dos mil veintidós (2022)

Magistrado Ponente: OSCAR SILVIO NARVÁEZ DAZA

ACCIÓN:	Ejecutiva
EXPEDIENTE:	760012333007-2018-00948-00
DEMANDANTE:	Cristhian Javier Rincón Silva. quingarasociados@gmail.com
DEMANDADO:	Nación – Fiscalía General de la Nación

RESUELVE SOLICITUD DE LIBRAR MANDAMIENTO DE PAGO

Vista la constancia secretarial, se advierte el asunto fue convocado inicialmente por el señor magistrado ponente Dr. Eduardo Antonio Lubo Barros, mediante acta de fecha 4 de febrero de 2019, para ser discutido con el resto de los magistrados de la Sala, Dr. Omar Edgar Borja Soto y el suscrito, ahora ponente, proyecto que consideraba “*Abstenerse de librar mandamiento ejecutivo*”.

El resto de la Sala de Decisión, respetuosamente desaprobó la ponencia, resultando esta finalmente derrotada por mayoría.

De ese modo correspondió a este ponente por turno, elaborar el nuevo proyecto.

Para resolver la procedencia del mandamiento ejecutivo, la Sala de Decisión del Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, Sistema Oral, parte de los siguientes,

I. PRESUPUESTOS

El señor Cristhian Javier Rincón Silva, actuando a través de apoderado judicial, instauró demanda en *acción ejecutiva* contra el Fiscalía General de la Nación, con el fin de que se libre mandamiento de pago a su favor por la suma de \$311.093.822, como resultado de la obligación cuyo pago pretende, la cual fue constituida en la sentencia declarativa de primera instancia proferida por esta Corporación el 29 de abril de 2013, dentro del expediente con radicación 2009-00606-00 (folios 20-26).



II. COMPETENCIA

De conformidad con lo preceptuado en el artículo 104, numeral 6¹ y el artículo 152 numeral 6², del CPACA, esta corporación es competente para conocer del presente asunto.

III. CONSIDERACIONES

Los artículos 297 a 299 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo – CPACA, regulan el proceso ejecutivo, definen qué constituye título ejecutivo y el procedimiento para la ejecución de contratos y condenas impuestas a entidades públicas; no obstante, esa norma no reglamenta en su integridad el proceso ejecutivo, razón por la que, conforme a lo dispuesto por el artículo 306 ibídem, se debe dar aplicación a las normas del Código General del Proceso, a fin de decidir si existe mérito para librar mandamiento de pago.

El artículo 297 del CPACA define el título ejecutivo, así:

“Artículo 297.- Para los efectos de este código, constituyen título ejecutivo:

1. Las sentencias debidamente ejecutoriadas proferidas por la jurisdicción de lo contencioso administrativo...”

El artículo 422 del Código General del Proceso (CGP), dispone que pueden demandarse ejecutivamente las obligaciones expresas, claras y exigibles que consten en documentos que provengan del deudor o de su causante, y constituyan plena prueba contra él.

A su vez, el artículo 306 del CGP, aplicable al presente caso comoquiera que se trata de una solicitud de ejecución a continuación del ordinario, prescribe:

“Artículo 306. Ejecución. Cuando la sentencia condene al pago de una suma de dinero, a la entrega de cosas muebles que no hayan sido secuestradas en el mismo proceso, o al cumplimiento de una obligación de hacer, el acreedor, sin necesidad de formular demanda, deberá solicitar la ejecución con base en la sentencia, ante el juez del conocimiento, para que se adelante el proceso ejecutivo a continuación y dentro del mismo expediente en que fue dictada. Formulada la solicitud el juez librará mandamiento ejecutivo de acuerdo con lo señalado en la parte resolutive de la sentencia y, de ser el caso, por las costas aprobadas, sin que sea necesario, para iniciar la ejecución, esperar a que se surta el trámite anterior.

¹ 6. Los ejecutivos derivados de las condenas impuestas y las conciliaciones aprobadas por esta jurisdicción, así como los provenientes de laudos arbitrales en que hubiere sido parte una entidad pública; e, igualmente los originados en los contratos celebrados por esas entidades.

² 6. De la ejecución de condenas impuestas o conciliaciones judiciales aprobadas en los procesos que haya conocido el respectivo tribunal en primera instancia, incluso si la obligación que se persigue surge en el trámite de los recursos extraordinarios. Asimismo, conocerá de la ejecución de las obligaciones contenidas en conciliaciones extrajudiciales cuyo trámite de aprobación haya conocido en primera instancia. En los casos señalados en este numeral, la competencia se determina por el factor de conexidad, sin atención a la cuantía. Igualmente, de, los demás procesos ejecutivos cuya cuantía exceda de mil quinientos (1.500) salarios mínimos legales mensuales vigentes.



Si la solicitud de la ejecución se formula dentro de los treinta (30) días siguientes a la ejecutoria de la sentencia, o a la notificación del auto de obediencia a lo resuelto por el superior, según fuere el caso, el mandamiento ejecutivo se notificará por estado. De ser formulada con posterioridad, la notificación del mandamiento ejecutivo al ejecutado deberá realizarse personalmente.

Cuando la ley autorice imponer en la sentencia condena en abstracto, una vez ejecutoriada la providencia que la concrete, se aplicarán las reglas de los incisos anteriores.

Lo previsto en este artículo se aplicará para obtener, ante el mismo juez de conocimiento, el cumplimiento forzado de las sumas que hayan sido liquidadas en el proceso y las obligaciones reconocidas mediante conciliación o transacción aprobadas en el mismo.

La jurisdicción competente para conocer de la ejecución del laudo arbitral es la misma que conoce del recurso de anulación, de acuerdo con las normas generales de competencia y trámite de cada jurisdicción.”

El presupuesto para el ejercicio de la acción ejecutiva es la existencia formal y material de un documento o conjunto de documentos que contengan los requisitos de título ejecutivo, de los cuales surja la certeza judicial o legal del derecho del acreedor y la obligación correlativa del deudor, debiéndose verificar si la providencias que se pretenden ejecutar contienen una obligación clara expresa y exigible en cabeza de la parte ejecutada y a favor de la parte ejecutante.

IV. CASO CONCRETO.

Si bien el título ejecutivo allegado obra en copia simple, respecto a ello, el H. Consejo de Estado, ha estimado mediante auto de importancia jurídica proferida por la Sección Segunda del Consejo de Estado el 25 de julio de 2016³ lo siguiente:

“[...] En relación con la ejecución de las sentencias de condena a entidades públicas, se concluye lo siguiente:

a. Las sentencias judiciales tienen un procedimiento especial de ejecución que se sigue a continuación del proceso en el cual se origina el título, cuya regulación parte de los artículos 306 y 307⁴ del CGP, y se complementa con las reglas propias del proceso ejecutivo previsto en el Artículo 422 y siguientes del mismo estatuto.

b. Para ello y en el caso de la jurisdicción de lo contencioso administrativo, quien obtenga una sentencia de condena a su favor puede optar por:

1. Iniciar el proceso ejecutivo a continuación del ordinario, para lo cual debe:

- Formular demanda para que se profiera el mandamiento ejecutivo de acuerdo con lo expuesto en la parte resolutive de aquella y en la cual se incluyan los requerimientos mínimos indicados en el aparte 3.2.4. de esta providencia.

³ C. de E. Auto interlocutorio II-O-001-2016 del 25 de julio de 2016, con radicado 11001-03-25-000-2014-01534 00 (4935-2014).



Es decir, el hecho de que se inicie el proceso ejecutivo a continuación del proceso ordinario no quiere significar que se pueda presentar sin ninguna formalidad y el ejecutante está en la obligación de informar si ha recibido pagos parciales y su monto.

- En este caso no será necesario aportar el título ejecutivo, pues este ya obra en el proceso ordinario.

De lo anterior se advierte que se pretendió fijar la línea consistente en que el juez del conocimiento adelante el proceso ejecutivo de sentencias, a través de un escrito de solicitud elevado por el acreedor dentro del mismo expediente con los conceptos y liquidaciones correspondientes, contrario a lo dispuesto como regla general en la jurisdicción de lo contencioso administrativo antes de la Ley 1437 de 2011, donde debía instaurarse una demanda con todas las implicaciones de un nuevo proceso, hasta el punto de reunir la totalidad de los requisitos formales para presentar un escrito demandatorio.

Asimismo, los Artículos 305 y 306 del CGP constituyen una clara aplicación del factor de conexidad como determinante de la competencia, por cuanto, tal y como lo prevén dichas normas, el juez que profiere una sentencia de condena es el que la ejecuta a continuación y dentro del mismo expediente en que fue dictada, sin necesidad de una nueva demanda. Igualmente, lo señalado en estos Artículos no traen algo nuevo en nuestro ordenamiento jurídico, toda vez que en los Artículos 334 y 335 del Código de Procedimiento Civil ya se traía el proceso de ejecución de sentencias.

En conclusión: No se requiere allegar la copia con la constancia de ejecutoria de los fallos, ya que las sentencias originales se encuentran en el expediente de nulidad y restablecimiento que adelantó el Tribunal, dentro del cual deberá continuar con la petición que radicó la señora Ana Cecilia Hoyos Astudillo, al tratarse de un proceso de ejecución de sentencias previsto en los Artículos 305 y 306 del CGP, que requiere únicamente el escrito debidamente fundamentado elevado por el acreedor ante el juez de conocimiento del asunto ordinario, último que, luego del estudio de los demás presupuestos procesales, deberá librar el mandamiento ejecutivo de acuerdo con lo señalado en la parte resolutive de la providencia.⁴ (subrayado fuera del texto).

Bajo esta perspectiva, no se requiere allegar copia auténtica de la providencia No. 75 de fecha 29 de abril de 2013 dentro del proceso con radicado 2009-00606-00, ya que corresponde al ponente desarchivar el expediente del proceso ordinario que adelantó el Tribunal, dentro del cual deberá continuar con la petición de la parte ejecutante, al tratarse de un proceso de ejecución de sentencias, por tanto, el título ejecutivo que se pretende ejecutar, se evidencia que son las mismas sentencias que comprenden una obligación clara y expresa, toda vez que contienen una condena contra la parte que resultó vencida en el proceso ordinario que dio origen a la acción ejecutiva, siendo actualmente exigible al quedar ejecutoriada la mencionada providencia, vale decir que han pasado más de dieciocho meses desde la mencionada fecha de ejecutoria, hasta la radicación del presente trámite ejecutivo.

Se trata por tanto de un título ejecutivo singular respecto del cual, aplicado lo anterior al caso, se tiene que los requisitos se cumplen por cuanto en lo que respecta a la:

⁴ C. de E. Sección Segunda Subsección A, CP: William Hernández Gómez, marzo 19 de 2020. Radicación: 25000-23-42-000-2015-03421-01(3337-16) Actor: Ana Cecilia Hoyos Astudillo Demandado: Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social



a) Expresividad, la obligación se encuentra debidamente delimitada, hay certeza respecto de su contenido, sus términos, sus condiciones y su alcance. En efecto, se trata del reconocimiento de una suma de dinero a través de una sentencia judicial.

b) Claridad, en tanto en cuanto se encuentran plenamente identificados tanto el deudor, vale decir, la Fiscalía General de la Nación, y como el acreedor, en este caso la parte ejecutante citada al inicio de esta providencia.

c) Exigibilidad, porque ella no se encuentra sujeta a plazo o condición. De hecho, indica el artículo 177 del Código Contencioso Administrativo –normatividad por la cual se tramitó el proceso ordinario– que las condenas serán ejecutables ante la “*justicia ordinaria*” –hoy contenciosa por disposición del artículo 134B.7 ib.– dieciocho (18) meses después de ejecutoriada.

En ese orden de ideas, teniendo en cuenta que el título base de la ejecución cumple a cabalidad con las exigencias formales de los artículos 306 del CGP y contienen una obligación expresa, clara y exigible, cumpliendo con los requisitos establecidos en el artículo 422 del CGP, por tanto, podría librarse mandamiento de pago en los términos de la Sentencia No. 75 de abril 29 de 2013 dentro del proceso radicado 2009-00606-00.

No obstante, el señor Cristhian Javier Rincón Silva acude al proceso ejecutivo en condición de cesionario titular del 100% de los derechos económicos que le corresponden a los señores “*Duvier Moncayo Andrade, Amanda Andrade González, Franco Omar Moncayo -Moncayo, John Emerson Moncayo Andrade, Stephanie Sadamy Moncayo y Evelyn Dahyana Moncayo Gerena, todos beneficiarios de la sentencia de primera instancia, proferida por el Tribunal Contencioso Administrativo del Valle del Cauca, el 29 abril de 2013, la cual quedó debidamente ejecutoriada el 19 de septiembre de 2013, en el proceso de reparación directa*” conforme se arrimó a folio 1 del expediente, sin que obre prueba de tal calidad.

Para el efecto, el artículo 166 del CPACA, numeral 3⁵ concordante con el artículo 84 numeral 2⁶ del CGP, respecto de los anexos de la demanda, imponen la carga de adjuntar prueba del carácter o calidad en que el actor comparece al proceso.

V. CONCLUSIÓN

Bajo esa perspectiva, advierte el ponente que, en aras de garantizar el acceso a la administración de justicia, en el *sub lite* es necesario que el apoderado de la parte ejecutante acredite la calidad de cesionario en que comparece al proceso, ya que en el plenario no obra prueba de ello.

⁵ El documento idóneo que acredite el carácter con que el actor se presenta al proceso, cuando tenga la representación de otra persona, o cuando el derecho que reclama proviene de haberlo otro transmitido a cualquier título.

⁶ La prueba de la existencia y representación de las partes y de la calidad en la que intervendrán en el proceso, en los términos del artículo 85.



VI. DECISIÓN

En mérito de lo expuesto, el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, Sala de Decisión del Sistema Oral,

RESUELVE

PRIMERO: REQUERIR a la parte ejecutante para que acredite la calidad de cesionario en que acude al proceso ejecutivo.

SEGUNDO: Para el efecto, **CONCEDER** el término de diez (10) días para que corrija lo indicado subsanando los defectos indicados en la parte motiva de esta providencia, conforme a lo dispuesto al artículo 170 del CPACA.

NOTIFÍQUESE y CÚMPLASE

OSCAR SILVIO NARVÁEZ DAZA
Magistrado